

Cali, marzo de 2012  
No. 21

EDITOR:

Comité de Investigaciones  
de la Facultad de Ciencias  
Sociales y Económicas de  
la Universidad del Valle.

Esta es una publicación del  
Centro de Investigaciones  
y Documentación  
Socioeconómica CIDSE  
de la Facultad de Ciencias  
Sociales y Económicas de  
la Universidad del Valle  
[www.univalle.edu.co](http://www.univalle.edu.co) <http://socioeconomia.univalle.edu.co>

Participa en este número:

Catalina Acosta Oidor  
Socióloga egresada del  
Programa de Sociología de la  
Universidad del Valle.  
Miembro del Grupo de  
Investigación Acción Colecti-  
va y Cambio Social  
- ACASO.



## Cidse

### EFFECTOS DEL CONFLICTO ARMADO SOBRE LA POBLACIÓN CIVIL EN EL VALLE DEL CAUCA DURANTE EL PRIMER DECENIO DEL SIGLO XXI<sup>1</sup>

Catalina Acosta Oidor

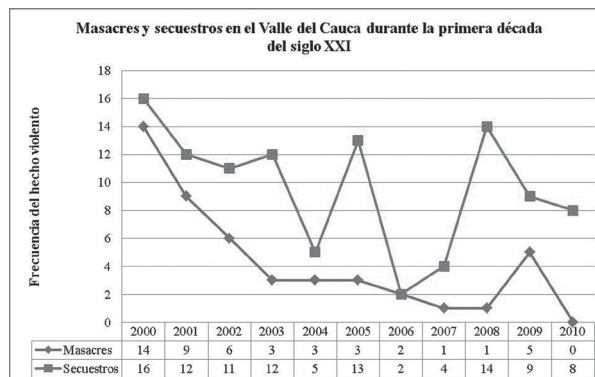
Como en otras regiones del país, en el Valle del Cauca también se han sufrido las consecuencias del conflicto armado. En principio, las guerrillas encontraron en este departamento una geografía montañosa que les permitía una conexión con el Pacífico –el puerto de Buenaventura–, donde hacerse a recursos para la guerra, ocultarse de sus enemigos potenciales, y ocultar a sus rehenes, debido a que el secuestro era una de sus principales fuentes de financiamiento. Posteriormente, –finalizando los años noventa y comenzando la primera década del siglo XXI, incursionaron los grupos paramilitares, en respuesta al crecimiento y fortalecimiento de la guerrilla, con lo que se agudizó el conflicto en el Valle.

En el presente artículo se intenta dar cuenta de algunos aspectos referentes a dicho conflicto, específicamente respecto a tres acciones violentas contra la población civil: masacres, secuestros y desplazamientos forzados. Ello a partir de un rastreo documental del archivo virtual del diario *El Tiempo*, los datos proporcionados por la Agencia Presidencial para la *Acción Social* y algunos relatos de quienes han sido víctimas de este tipo de hechos, con el propósito de evidenciar tanto lo que significa para ellas la experiencia con la violencia, como para intentar una aproximación al conocimiento de sus percepciones frente a la reparación al daño que dicha experiencia les ha ocasionado.

#### Masacres, secuestros y desplazamientos forzados de población

El decenio que comprende los años 2000 – 2010 en el Valle del Cauca, se caracteriza porque en su primera mitad la concentración de la violencia es un poco más notable que durante los años 2006-2010, específicamente en términos de masacres y secuestros. En el caso particular de las masacres se observa que es el año 2000 el más crítico (14 masacres). Sin embargo, para el año siguiente y en adelante, se registra una tendencia a la disminución de este tipo de hecho violento, desapareciendo totalmente en 2010.

Gráfico 1



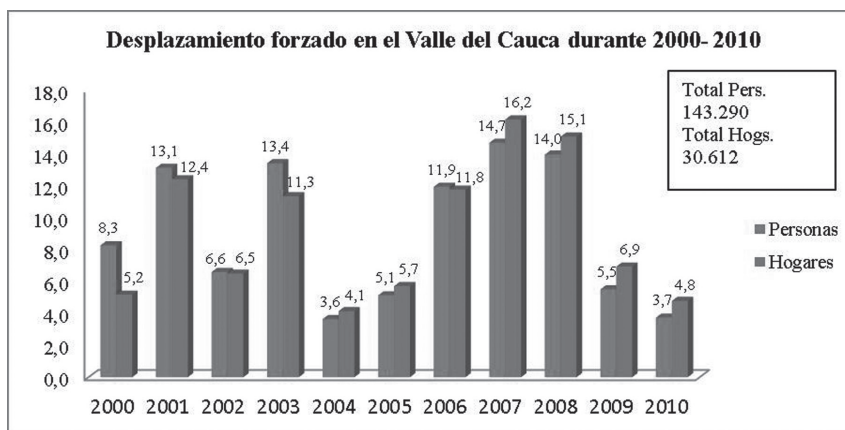
Fuente: cálculos propios a partir de datos obtenidos en *El Tiempo*

<sup>1</sup> El presente artículo corto es producido a partir de los resultados obtenidos en la investigación *Conflicto Armado en el Valle del Cauca durante la primera década del siglo XXI, Masacres, secuestros y desplazamientos forzados: los datos y la voz de las víctimas*, realizada en el marco del programa Jóvenes Investigadores de Colciencias 2010.

En el caso del secuestro, pese a que es también el año 2000 el más crítico (16 secuestros), se evidencia un registro constante de secuestros, con un promedio de 10 secuestros por año, principalmente en la primera mitad de la década. A partir de 2006 en adelante se presentan variaciones marcadas, con disminución importante de secuestros en los años 2006, 2007. Sin embargo, para los últimos

tres años de la década vuelve a incrementarse de nuevo la frecuencia de secuestros. Por su parte, el desplazamiento forzado registra mayores valores durante la última mitad de la década, con tendencia más bien constante, pese a los registros significativos entre 2000 y 2005.

Gráfico 2



Fuente: cálculos propios a partir de datos proporcionados por la Agencia Presidencial para la Acción Social

El principal factor que explicaría tanto las masacres como los desplazamientos forzados comenzando la década (2000-2001) es la emergencia de grupos paramilitares que, en principio, tenían como objetivo la eliminación de redes de apoyo de las guerrillas asentadas en diferentes municipios del Valle del Cauca, principalmente en las áreas rurales de los mismos. En el caso particular de las masacres, se atribuyen aquí a una estrategia de guerra propia de los paramilitares. Las masacres fueron el medio con el cual éstos buscaban ganar influencia o en lo posible hacerse al control territorial de la región. Así, de 47 masacres registradas durante 2000-2010, 19 fueron perpetuadas por paramilitares, 11 se atribuyen al narcotráfico, 3 a las Farc, 1 a la delincuencia común, 1 a las Fuerzas Armadas del Estado y en 12 casos no se especifica el autor. Se resalta que en el año 2000, en el que ocurrieron 14 masacres, los paramilitares cometieron 11 de éstas, mientras en los 3 casos restantes no se especifica autor.

Por el contrario, en el Valle del Cauca los secuestros corresponden a una estrategia importante de las guerrillas, en especial de las Farc. Sin embargo, debe mencionarse que la delincuencia común también hizo un aporte significativo en la realización de dichos secuestros, aunque en algunos casos los secuestros ejecutados por delinquentes comunes tuvieron como objetivo negociar a los cautivos con las Farc. De esta manera, de 114 secuestros registrados para la primera década del siglo XXI, 30 fueron atribuidos a la guerrilla de las Farc, 28 a la delincuencia común, 7 a la guerrilla del Eln, 5 al narcotráfico, 1 a la guerrilla Jaime Bateman Cayón y 39 casos no especifican autor.

Los desplazamientos forzados en cambio, debido a que son generados por las masacres, pero también por otra multiplicidad de acciones armadas (amenazas, bombardeos, enfrentamientos entre grupos enemigos, etc.), tienen un carácter compartido por

todos los actores del conflicto. Sin embargo, la introducción del paramilitarismo en el Valle del Cauca parece ser el agente principal de los desplazamientos a comienzos de la década.

Nunca, desde 1985, cuando desplazar campesinos comenzó a ser una estrategia de guerra, se habían desplazado tantos como este año. [...] En tercer lugar está el Valle del Cauca –después de Antioquia y Bolívar– nuevo escenario de la pelea paras–insurgencia, que provocó la movilización de 15.927 personas (El Tiempo, 7 de diciembre de 2000).

De los 42 municipios que componen el departamento del Valle las masacres fueron ejecutadas en 16 de éstos. La ciudad más afectada fue Buenaventura con un total de 16 masacres perpetuadas durante la primera mitad de la década 2000-2010. Le siguen las ciudades de Cali, Buga, Jamundí, Tuluá y la región del Naya, en las que se registraron entre 3 y 5 masacres. En los 10 municipios restantes sólo se registraron entre 1 y 2 casos, respectivamente. A su vez, se evidencia que son las extensiones rurales de los municipios las más afectadas, así, el 61% de las masacres ocurrieron en zona rural y el 38% en zona urbana.

Los secuestros fueron ejecutados en 24 municipios del departamento. La ciudad de Cali fue la más afectada con 28 considerando todo el período. Después de ésta, la ciudad de Tuluá tuvo la mayor frecuencia de secuestros con 14 casos. Otras que pueden considerarse significativamente afectadas son Buenaventura, Buga, Candelaria, Dagua, Florida, Jamundí y Palmira, donde ocurrieron entre 4 y 6 secuestros por ciudad. De manera general, las localidades donde ocurrieron estos secuestros son las rurales (52), pero debe anotarse que la ocurrencia de secuestros en las zonas urbanas es ligeramente inferior (42), además de que en 20 casos no se establece el autor.

En el caso del desplazamiento forzado, en términos de ex-

pulsión, en los 42 municipios que conforman el Valle del Cauca se presenta algún porcentaje de él. No obstante, las ciudades más afectadas son Buenaventura (55,2% de personas y 49,8% de hogares), Tuluá (7% y 7,5%) y Jamundí (4% y 3,4%). Se resalta la experiencia particular de Buenaventura porque, dramáticamente, concentra más de la mitad del desplazamiento de personas y la mitad del desplazamiento de hogares registrados para el conjunto del departamento (143.290 personas y 30.612 hogares). Los años más críticos por motivo del desplazamiento fueron 2001, 2003 y 2006-2008.

La experiencia de esta ciudad parece obedecer a condiciones específicas. Aunque es coherente que sea el municipio de mayores registros de desplazamiento, debido a que es también el lugar donde se presentaron mayor número de masacres (16), ello no resulta consecuente con el hecho de que las masacres se acumulan en los primeros años de la década, presentado disminuciones significativas y estables del 2003 en adelante, mientras que los desplazamientos y, en particular, la contribución que hace Buenaventura como municipio de expulsión, son inconstantes y elevados comenzando la década, y posteriormente, durante los años 2006 – 2008.

Seguramente, como se ha dicho, la incursión de grupos paramilitares en un comienzo tuvo una influencia decisiva en la expulsión de población civil, no obstante, este municipio posee características propias que lo hacen vulnerable a la presencia constante del conflicto armado. Principalmente, su ubicación geográfica sobre el Océano Pacífico convierte a Buenaventura en un puerto de gran importancia comercial para el país, pero a su vez, para el contrabando, el narcotráfico y el ingreso de armas para los grupos al margen de la ley.

En consecuencia, en el panorama del conflicto en Buenaventura es posible identificar algunos elementos determinantes, entre ellos se destaca la incursión y consolidación paramilitar entre los años 1999 y 2000 generando numerosas masacres y desplazamientos de población. Posteriormente, entre 2004 y 2005 se desmovilizan grupos paramilitares, pero las áreas de acción de estos son copadas nuevamente por las Farc. No obstante, debido a que algunos miembros de grupos paramilitares no se desmovilizaron, pasan a hacer parte de organizaciones de narcotráfico, con lo cual se aseguró la expansión de las rutas para el comercio de la droga que tenían los paramilitares antes de desmovilizarse. Es por ello que a partir del año 2005 se inicia una disputa entre grupos narcotraficantes y guerrilla en el norte del Valle y el Cañón de Garrapatas por la expansión hacia el corredor del Pacífico.

Todos estos elementos contribuyen a la generación de un clima de violencia en Buenaventura que convierte a sus habitantes en población vulnerable, por lo cual se producen desplazamientos de diferentes tipos: masivos, individuales, intraveredales e intraurbanos (Codhes, 2006).

### **La Voz de las Víctimas**

Según los relatos analizados, la experiencia del desplazamiento forzado implica el trastocamiento de la vida de las familias debido a que los obliga a cambiar todo el universo conocido por uno nuevo no deseado, en el que deben establecerse y sobrevivir. Del territorio de expulsión –Buenaventura– huyen por la violencia generada por grupos armados, que se encuentran asentados en los barrios de la ciudad y no en las zonas rurales. Específicamente,

los desplazamientos ocurrieron en los últimos años de la década (2008, 2009 y 2010) como resultado de amenazas por cuenta de grupos paramilitares, de los que se afirma, no se desmovilizaron. Sin embargo, la guerrilla también se encuentra asentada en zonas de Buenaventura disputadas con los paramilitares.

Así, se generan límites territoriales, poniendo en riesgo a la población, de la que se exige exclusividad y obediencia, imponiendo su autoridad a través de métodos coercitivos y de sometimiento. Por estas razones los migrantes no desean retornar a su lugar de origen y residencia aunque en sus relatos anhelan la estabilidad económica que allí tenían.

En consecuencia, respecto al territorio de llegada se observó que por lo general las personas desplazadas arribaron a sectores de la ciudad de Cali, en los que se presentan niveles considerables de pobreza, hacinamiento y algún tipo de violencia, factor del que vienen huyendo. Aquí, sobreviven con la incertidumbre respecto a su porvenir, carecen incluso de recursos para satisfacer sus necesidades básicas. Por esta razón, en algunos casos se siente vergüenza por la condición de desplazados que los llevó a tener que vivir situaciones que antes les eran ajenas, como verse obligados a depender de la ayuda de otros.

En sus percepciones frente a lo ocurrido se observan dificultades en cuanto a la efectividad del perdón hacia sus agraviantes debido a la ausencia de una verdadera solicitud de disculpa y aceptación de la responsabilidad en los hechos violentos cometidos por éstos. Esta anotación aplica tanto para las Farc como para los grupos paramilitares que aún ejercen presión a los pobladores de Buenaventura. En esta medida se cuestionan también las posibilidades reales de un proceso de reconciliación, según la concepción estatal, dado que el conflicto armado continúa y los procesos de desarme, desmovilización y reinserción que se llevaron a cabo no parecen haber sido efectivos. Además, tampoco se ha procurado el diálogo con otros grupos armados que aún siguen operando, como es el caso de las Farc. Por estas razones, el perdón que manifiestan las víctimas es más bien resultado de la resignación ante la ausencia de dichas manifestaciones de arrepentimiento por parte de los victimarios y sobre todo ante la imposibilidad de que éstos sean sancionados judicialmente, lo que sería el primer paso hacia la compensación como víctimas. Ello, debido entre otras cosas, a una percepción débil del Estado, resaltando su incapacidad para controlar y sancionar a dichos actores armados.

En consecuencia, para la reparación al daño ocasionado por los actores armados –Farc y paramilitares–, las personas desplazadas, dadas sus condiciones de vida desfavorables, esperan de la reparación, principalmente, concesiones materiales: vivienda y empleo. A su vez, frente al proceso de reparación y reconciliación adelantado por el Estado, las víctimas del desplazamiento manifiestan algunos desacuerdos. Por ejemplo, no consideran deseable ni pertinente traer a la memoria la experiencia violenta y por consiguiente tampoco contar a otros. Por el contrario, les parece que olvidar les facilita el desarrollo de sus vidas en sus nuevas condiciones.

Además, de acuerdo con las percepciones de las víctimas de desplazamiento, se comprueba descontento frente a dicho proceso de reparación, por la lentitud con la que se atienden sus demandas, dado el carácter urgente de sus necesidades en un contexto desconocido. Los procesos burocráticos en este aspecto, se manifiestan como obstáculo para la efectividad y éxito de la

reparación. A su vez, las víctimas manifiestan sentirse vulneradas por el Estado, dado el tratamiento “privilegiado” que consideran que se le proporciona a los desmovilizados en el marco del proceso de Justicia y Paz.

## En síntesis...

De manera general, podría decirse que el departamento del Valle del Cauca a comienzos del siglo XXI se vio considerablemente afectado por la incursión paramilitar, y que posteriormente, pese a la desmovilización de la mayor parte de grupos pertenecientes a esta organización, continúa viéndose vulnerado por el accionar de grupos armados, debido a que desde el 2004 en adelante se empiezan a disputar regiones del Valle consideradas corredores estratégicos, militar y económicamente, específicamente, para el narcotráfico. Estas zonas son básicamente Buenaventura y los municipios del norte que conducen hacia el Cañón de Garrapatas, zonas de comercialización y procesamiento de la coca.

Sin embargo, también se hizo presente el conflicto en otros municipios del sur del Valle, cuando la guerrilla de las Farc –aproximadamente en 2006– solicitaba el despeje de los municipios de Pradera y Florida para una eventual negociación con el Gobierno nacional en pro de un intercambio humanitario de secuestrados, que finalmente no tuvo lugar.

Los años posteriores se caracterizan por una arremetida de las fuerzas armadas del Gobierno hacia los grupos guerrilleros y las bandas criminales al servicio del narcotráfico. Ello, sumado al continuo accionar bélico de las guerrillas, probablemente constituye un factor de riesgo en la generación de problemáticas como el desplazamiento forzado de población civil, por lo cual no se evidencian disminuciones con continuidad en el tiempo. Las masacres como ya

se ha explicado disminuyeron considerablemente sin desaparecer, porque eran acciones propias de los paramilitares que se suponían desmovilizados. En el caso de los secuestros civiles, estos continúan haciendo parte importante en el accionar de las guerrillas, en particular las Farc, pero también de la delincuencia común, por lo que aunque han disminuido los niveles de secuestro en el Valle en comparación con el año 2008, no se experimenta una tendencia a la reducción a niveles importantes como los de otros años.

## Referencias

- AHUMADA CASAS, Madelene y Tapia Góngora, Edwin M. (2006). *El Valle del Cauca entre puntos de confrontación, crisis humanitaria y la fractura política de la atención al desplazado*. [en línea] Consultoría para los Derechos Humanos, CODHES. Dirección URL: <[http://www.codhes.org/index2.php?option=com\\_docman&task=doc\\_view&gid=143&Itemid=50](http://www.codhes.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=143&Itemid=50)> [Consulta: agosto 2011].
- CARVAJAL P. Alberto E. (2007). “Ocho tesis acerca de lo que está pasando en Buenaventura: evidencia de un caos”. *Posiciones*, N° 1, 42 – 57.
- CASTILLO G. Luis Carlos, Guzmán B. Álvaro, Hernández L. Jorge, Luna B. Mario y Urrea G. Fernando. (2010). *Etnicidad, Acción colectiva y Resistencia: El norte del Cauca y el sur del Valle a comienzos del siglo XXI*. Santiago de Cali: Editorial Universidad del Valle, 410 p.
- ECHANDIA C. Camilo. (2004). “La Guerra por el Control Estratégico en el Suroccidente Colombiano”. *Sociedad y Economía* N° 7, 65-89.